

Art. 115. Cuando se reclamare ante el Congreso contra la validez de una elección ó la aptitud legal del Diputado electo, antes de que éste hubiese presentado su credencial, señalará el Congreso un término para su presentación, y pasado el plazo sin efecto, se acordará lo que corresponda, según las pruebas de la acta y de las reclamaciones. El término que en estos casos se señalará para la presentación de la credencial del Diputado electo, empezará á correr desde el día de la sesión pública del Congreso en que se hubiese acordado, sin necesidad de notificación alguna personal.

Art. 116. Cuando para poder apreciar y juzgar de la legalidad de una elección reclamada ante el Congreso, se estimare necesario practicar algunas investigaciones en la localidad de la misma sección, el Presidente de la Cámara dará y comunicará directamente las órdenes á una de las autoridades judiciales del territorio á quien tenga por conveniente dar comisión al efecto, y dicha Autoridad comisionada se entenderá con el mismo Presidente en el desempeño de su cargo, sin necesidad de intervención del Gobierno.

Art. 117. Despues de aprobada por el Congreso una elección y de ser admitido el Diputado electo por ella, no se podrá admitir reclamación alguna, ni volver á tratar sobre la validez de la misma elección, ni tampoco sobre la aptitud legal del Diputado, á no ser por causa de incapacidad posterior á su admisión.

TITULO VI.

DE LA SANCIÓN PENAL.

CAPITULO I.

De los delitos.

Art. 118. La falsedad cometida en documentos referentes á las disposiciones de este decreto, de cualquiera de los modos señalados en el artículo 310 del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico, constituye delito de falsedad en materia electoral, que será castigado con las penas establecidas en dicho artículo ó en el siguiente, según el carácter de las personas responsables.

Igual delito constituirán, y con las mismas penas serán castigadas, la ficción total ó parcial de tales documentos y la omisión intencionada, en los verdaderos, de nombre ó circunstancia que debieran expresar.

Art. 119. Los Tribunales, sin embargo, rebajarán en uno ó dos grados la pena, imponiéndola en el que estimen conveniente, cuando la falsedad no tenga otra trascendencia que la meramente electoral y no hubiese producido grave escándalo.

Art. 120. Son documentos oficiales, para los efectos de esta ley, el censo y sus copias autorizadas, las actas, listas, certificaciones y cuantos emanen de personas á quien la ley encargue su expedición, ya tengan por objeto facilitar ó acreditar el ejercicio del derecho electoral ó su resultado, ó garantizar la regularidad del procedimiento.

Art. 121. Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 500 á 5,000 pesetas, cuando las disposiciones del Código penal no señalen otra mayor, los funcionarios públicos, que, por dejar de cumplir íntegra y estrictamente los deberes impuestos por este decreto ó por las disposiciones que se dicten para su ejecución, contribuyan á algunos de los actos ó omisiones siguientes:

1º A que las listas de electores, ya sean provisionales ó definitivas, no se formen con exactitud ó no estén expuestas al público durante el tiempo y en el lugar correspondientes.

2º A cualquiera alteración de los días, horas ó lugar en que deba celebrarse cualquier acto ó á que su modo de designación pueda inducir á error.

3º A manejos fraudulentos en las operaciones relacionadas con la formación del censo, constitución de las Juntas y Colegios electorales, votación, acuerdos ó escrutinios y propuestas de candidatos.

4º A que no se extiendan con la exactitud y expresión debidas ó no se firmen oportunamente y por todos los que deban hacerlo, ó á que no tengan el curso debido las actas ó documentos electorales.

5º A cambiar ó alterar la papeleta de votación que el elector entregue al ejercitar su derecho, ó á ocultarla de la vista del público antes de depositarse en la urna.

6º A que se impida ó dificulte á los electores, candidatos ó Notarios, que examinen por sí la urna antes de comenzar la votación, y al hacerse el escrutinio, las papeletas que de ellas se extraigan.

7º A la anotación indebida ó inexacta, de manera que oscurezca la verdad, de los nombres de los votantes en cualquier acto.

8º Al infiel recuento de votos ó lectura de papeletas para favorecer un acuerdo ó á un candidato ó para perjudicarle.

9º A descubrir el secreto del voto ó de la elección con el fin de influir en su resultado.

10. A que se haga proclamación indebida de persona á quien no corresponda.

11. A que se falte á la verdad en manifestación que deba hacerse en acta electoral, ó á que por cualquier acto ó omisión se tienda á evitar ó dificultar el oportuno conocimiento de la verdad electoral.

12. A suspender, sin causa grave y suficiente, cualquier acto electoral.

Art. 122. Los particulares que contribuyan directa-

mente á la Comisión de alguno de los delitos enumerados en el artículo anterior, serán castigados con la pena de arresto mayor en grado mínimo cuando al hecho que ejecutaren ó á la omisión en que incurrieren, no corresponda pena mayor con arreglo al Código penal.

Art. 123. Todo acto, omisión ó manifestación contrarios á este Decreto ó á disposiciones de carácter general dictadas para su ejecución, que no estando comprendido en los artículos anteriores, tenga por objeto cohibir ó ejercer presión sobre los electores para que usen de su derecho ó le abandonen contra el impulso libre de su voluntad, constituye delito de coacción electoral; y, si no estuviese previsto en el Código penal con sanción mas grave, será castigado con la multa de 125 á 2500 pesetas.

Art. 124. Cometten además delito de coacción electoral, aunque no conste ni aparezca la intención de cohibir ó ejercer presión sobre los electores, que incurren en la sanción del artículo anterior:

1º Las Autoridades civiles, militares ó eclesíásticas que prevengan ó recomienden á los electores que den ó nieguen su voto á persona determinada y los que, haciendo uso de medios ó de agentes oficiales ó autorizándose con timbres, sobres, sellos ó membretes, que puedan tener este carácter, recomienden ó reprueben candidaturas determinadas.

2º Los funcionarios públicos que promuevan ó cursen expedientes gubernativos de denuncias, multas, atrasos de cuentas, propios, montes, pósitos ó cualquier otro ramo de la administración, desde la convocatoria hasta que se haya terminado la elección.

3º Los funcionarios, desde Ministro de la Corona inclusive, que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones ó suspensiones de empleados, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la Administración, ya corresponda al Estado, á la provincia ó al municipio, en el período desde la convocatoria hasta despues de terminado el escrutinio general, siempre que tales actos no estén fundados en causa legítima y afecten de alguna manera á la sección, colegio, distrito, partido judicial ó provincia donde se verifique la elección.

La causa de la separación, traslación ó suspensión se expresará precisamente en la orden, y se publicará esta en la *Gaceta de Madrid* si emana de la Administración Central, y en el *Boletín oficial* de la provincia respectiva si fuese dictada por la provincial ó municipal. Omitidas estas formalidades, se considerará realizada sin causa.

Se exceptúan de estos requisitos los Reales Decretos ú órdenes relativas á los Gobernadores civiles de las provincias y á los Jefes militares.

125. Es tambien aplicable la pena señalada en el artículo 123, á no serlo otra mayor por virtud de disposición del Código penal:

1º A los que por medio de persona reputada criminal ó de promesa, dádiva ó remuneración, soliciten, directa ó indirectamente, en favor ó en contra de algún candidato, el voto de algún elector, ó le exciten á la embriaguez para obtener ó asegurar su adhesión.

2º Al que vote dos ó mas veces en una elección, tome nombre ajeno para votar ó lo haga estando incapacitado ó teniendo suspendido el ejercicio de tal derecho.

3º Al que á sabiendas consienta sin protesta, pudiendo hacerla, la emisión del voto en los casos del número anterior.

4º Al que niegue ó retarde la admisión, curso y resolución de las protestas y reclamaciones de los electores, ó no dé resguardo de ellas al que las hicieren.

5º Al que omita los anuncios y pregones de notificación que ordene este decreto, ó no expida ó no mande expedir tan pronto como este dispone, certificación solicitada de actos electorales.

6º Al que sin causa legítima deje de concurrir á acto de obligatoria asistencia.

7º Al que de cualquier otro modo no previsto en este decreto impida ó dificulte que un elector ejercite sus derechos ó cumpla sus deberes.

8º Al que suscite maliciosamente ó mantenga sin motivo racional dudas sobre la identidad de una persona ó sus derechos.

Art. 126. Los funcionarios públicos que hagan salir de su domicilio ó residencia ó permanecer fuera de ellos, aunque sea con motivo de servicio público, á un elector en el día de la elección ó en el que quiera y pueda efectuar un acto electoral ó los que le detuviesen privándole en casos iguales de su libertad, además de las penas señaladas en el artículo 221 y en el párrafo 2 del 210 del Código penal, incurrirán en la de inhabilitación absoluta perpétua.

Art. 127. Los que impidan ó dificulten la libre entrada y salida de los electores en el lugar en que deban ejercer su derecho, su aproximación á las mesas electorales, la permanencia de Notarios, candidatos ó electores en los lugares en que se realicen los actos electorales, de manera que les sea fácil ejercitar su oficio ó su derecho y comprobar la regularidad de tales actos, incurrirán siendo funcionarios públicos, en la pena de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 500 á 2500 pesetas; y siendo particulares, en la pena de arresto mayor en su grado mínimo á no ser que al hecho estuvieran señaladas otras penas más graves en el Código penal, en cuyo caso se aplicarán éstas.

Art. 128. Los funcionarios públicos que no entreguen ó que demoren maliciosamente la entrega de documentos reclamados por comisionado especial, serán castigados como reos de delito de desobediencia grave

á la Autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria en que á la vez incurran.

Art. 129. Los delitos previstos en el Código penal que tengan por objeto la materia electoral, se castigarán, cuando no sean aplicables las disposiciones especiales de los artículos precedentes, con las penas que el mismo Código, señala y además con una multa de 125 á 1250 pesetas, en caso de que no correspondiera á aquella pena de esta clase.

Art. 130. Serán penas comunes para todos los delitos relacionados inmediatamente con las disposiciones de este Decreto, ya se hallen en ella previstos ó lo estén en otra, la de inhabilitación especial temporal ó perpétua para derecho de sufragio, cuando el culpable sea ó tenga el carácter de funcionario público, y la de suspensión del mismo derecho cuando sea particular.

En caso de reincidencia por delito de esta especie, la inhabilitación correspondiente á los funcionarios será absoluta perpétua, y á los particulares se impondrá la inhabilitación absoluta temporal, además de las penas correspondientes.

CAPITULO II

De las infracciones.

Art. 131. Toda falta de cumplimiento de las obligaciones y formalidades que este Decreto ó las disposiciones que se dicten para su ejecución impongan á cuantas personas intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, será corregida con una multa de 25 á 1000 pesetas en caso de no constituir delito.

Los funcionarios que por cualquier causa que no sea de absoluta imposibilidad justificada dejen de cumplir cualquiera de los servicios que les impone este Decreto, incurrirán en la expresada multa, que declarará la Comisión inspectora del censo ante la que el servicio debió prestarse.

Art. 132. Serán corregidos de igual modo, como ordena el artículo anterior:

1º Los concurrentes á los actos electorales que, de un modo que no constituya delito, perturben el orden ó falten al respeto debido.

2º Los que no siendo electores de la Sección ó candidatos ó Notarios reconocidos con tal carácter, no abandonaren el local á la primera intimación del Presidente.

3º Los que penetren en un Colegio, Sección ó Junta electoral con armas, palos, bastones ó paraguas no siendo Autoridad, ó no hallándose en el caso del artículo 92.

4º Los Notarios que intentando ejercer su oficio no den conocimiento previo de su propósito al que presida el acto.

5º Los funcionarios y los particulares por cuya causa no reciba quien corresponda, en los plazos señalados y de la manera establecida en este Decreto, alguna comunicación, aviso, acta ó documento que deba tramitarse, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4º del artículo 125.

6º Los Vocales de las Comisiones inspectoras del censo que sin justa causa no concurren á las sesiones para que fueren convocados sin haberse escusado oportunamente.

Serán justas causas para no concurrir á las sesiones:

1º La ausencia del lugar en que estas se celebren.

2º Atenciones preferentes del servicio público.

3º Motivos de salud personal ó de familia ú ocupaciones inaplazables.

CAPITULO III.

De las disposiciones generales

Art. 133. Para los efectos de este Decreto se reputarán funcionarios públicos los de nombramiento de Gobierno y los que, por razón de su cargo, desempeñen alguna función relacionada con las elecciones, así como los Presidentes y los Vocales de las Comisiones inspectoras del censo electoral y los Presidentes ó Interventores de las Mesas y de las Juntas de escrutinio.

Art. 134. La jurisdicción ordinaria es la única competente para el conocimiento de los delitos electorales, cualquiera que sea el fuero personal de los responsables.

Para los efectos de las disposiciones de este título se entenderá que son delitos electorales los expresamente previstos en este Decreto, y los que estándolo en el Código penal, afecten á la materia propiamente electoral.

Art. 135. Cuando dentro del Colegio ó Junta electoral se cometiese algún delito el Presidente mandará detener y pondrá á los presuntos reos á disposición de la Autoridad judicial.

La acción penal que nace de los delitos especialmente electorales es pública y podrá ejercitarse hasta dos meses despues del término del mandato conferido por la elección. Para su ejercicio no se exigirá depósito ni fianza. Los Jueces y Tribunales procederán según las reglas del enjuiciamiento criminal.

Art. 136. No se necesitará autorización para procesar á ningún funcionario.

Las causas en que por sentencia firme se exima de responsabilidad por obediencia debida se remitirán sin dilación al Tribunal que sea competente para proceder contra el que dió la orden obedecida.

El plazo de la prescripción á que se refiere el artículo anterior estará en suspenso respecto de la Autori-